

COVID-19 en año electoral: panorama económico-social de corto plazo para Bolivia

Pablo Rossell Arce

Mayo 2020

- Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 la economía boliviana -que ya venía en franca desaceleración desde años atrás- sufrió dos golpes importantes: primero, el conflicto post electoral que duró aproximadamente un mes, luego de los comicios del 20 de octubre del año pasado; en marzo de 2020 se propagó el COVID-19 en territorio boliviano y el gobierno decretó una larga cuarentena que durante las primeras semanas paralizó prácticamente todas las actividades.
- Al igual que en el resto del mundo, golpeado por la pandemia, la paralización de actividades está provocando una crisis económica de enormes proporciones. Los resultados económicos previstos para este año son negativos en crecimiento y se prevé la presencia de déficit de cuenta corriente y déficit fiscal de manera simultánea.
- Para enfrentar la pandemia, el gobierno de transición ha adoptado algunas medidas de alivio para las empresas y las familias, pero quedan una serie de retos que se deben resolver y tienen un horizonte de mediano y largo plazo.
- La situación del país es particularmente crítica pues el gobierno es un gobierno de transición, con el principal mandato de llamar a elecciones, pero la presidenta transitoria es, al mismo tiempo candidata. Este factor complejiza las percepciones de legitimidad de las medidas de política económica. En el futuro previsible se puede prever un incremento de la conflictividad, así como la emergencia de nuevos actores políticos. Si la conflictividad no es gestionada adecuadamente, ésta podría ser la causante de la reversión de algunas medidas de política económica.



Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. COYUNTURA GLOBAL E IMPACTOS EN BOLIVIA	4
3. OPCIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA	7
3.1 LA RESPUESTA A LA CRISIS	7
3.2 EL DISEÑO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES	8
4. PANORAMA SOCIOPOLÍTICO	9
5. SINTESIS	11
6. REFERENCIAS	12



INTRODUCCIÓN

El año 2019 marcó en Bolivia un hito importante en la historia reciente del país con el fin de la gestión de Evo Morales, que gobernó ininterrumpidamente desde el 22 de enero de 2006 hasta el 10 de noviembre de 2019. Morales asumió la presidencia durante el superciclo de los precios de los *commodities*. En ese contexto, nacionalizó los hidrocarburos e imprimió un mayor peso a presencia del Estado en la economía, capturando el excedente hidrocarburífero para destinarlo a la inversión en infraestructura y al potenciamiento de las políticas sociales. Desde 2015 la economía boliviana empezó a sentir los efectos del fin del superciclo, pero mantuvo niveles mínimamente aceptables de crecimiento en relación a los países de América Latina.

En octubre de 2019 la población boliviana acudió a las urnas para una elección *sui generis*: Morales estaba encaminado a una nueva reelección, prohibida por la Constitución Política del Estado de 2009. El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales había intentado levantar la limitación constitucional en un referéndum el año 2016, pero perdió en las urnas. Sin embargo, a partir de ese momento la estrategia del entonces mandatario y su partido se enfocó en buscar mecanismos legales para superar la limitación impuesta por el resultado del referéndum. Finalmente, se optó por realizar una consulta al Tribunal Constitucional, que en noviembre de 2017 emitió una sentencia que avaló la posibilidad de una segunda reelección.

El resultado oficial de las elecciones de 2019 dio como ganador a Morales con un muy estrecho margen (47,08% vs 36,51%) sobre Carlos Mesa, su más próximo contendiente.¹ Pero una serie de irregularidades que se sucedieron a partir de la noche de la elección con la interrupción de la transmisión del conteo rápido, encendieron la mecha del descontento de las clases medias ciudadanas que protestaron durante semanas en

contra del Gobierno denunciando fraude. El saldo de las protestas fue la renuncia de Morales, precipitada por el amotinamiento de la Policía.

En una confusa sucesión de acontecimientos luego de la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García, también dimitieron el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores. De esa manera, quedaba interrumpida la posibilidad de una sucesión constitucional. Luego de varios días de conflictos callejeros y negociaciones en reserva, el 12 de noviembre de 2019 Jeanine Añez -segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores- asume la presidencia transitoria del país con el aval del Tribunal Constitucional.

Bolivia arrancó el año 2020 con la economía debilitada por el declive económico de Brasil y Argentina y por las consecuencias de casi un mes de conflictos poselectorales. La ruta crítica, a principios de año, consistía en realizar elecciones, contar con un Gobierno electo por los próximos cinco años y definir políticas económicas que establezcan soluciones estructurales. Pero antes de finalizar el mes de enero, la presidenta transitoria lanzó su candidatura -que generó preocupación por el doble rol de gestora pública y candidata- y para marzo la pandemia del COVID-19 empezaba a golpear a la población boliviana. El Gobierno decretó el confinamiento general. El impacto de la drástica interrupción de la actividad económica sumado a los efectos de una doble crisis global (sanitaria y económica) por la presencia del COVID-19 y el desplome de los precios de los hidrocarburos sobre los ingresos fiscales y la balanza de pagos del país, fueron determinantes. Al momento de escribir este documento, la fecha de realización de las elecciones generales (originalmente pactadas para el 3 de mayo) está en suspenso.

En lo que sigue se analiza la coyuntura económica global y sus repercusiones para América Latina y Bolivia, las opciones de política y el panorama sociopolítico previsible en el corto plazo.

¹ La normativa boliviana establece que un candidato gana en primera vuelta si obtiene el 50% más 1 de los votos válidos. De lo contrario, debe lograr 40% de los votos y una diferencia de, al menos, 10% en relación al segundo candidato más votado, para evitar la segunda vuelta.



2. COYUNTURA GLOBAL E IMPACTOS EN BOLIVIA

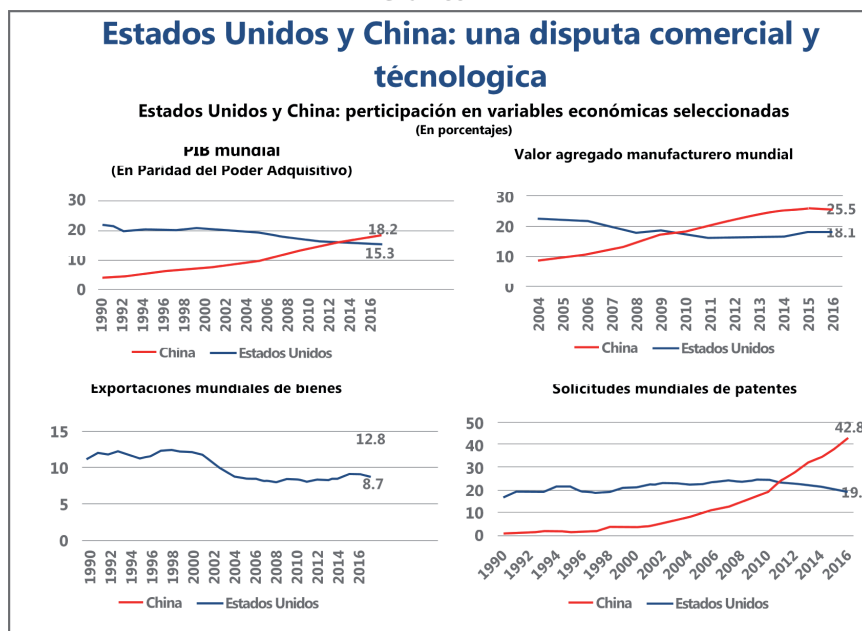
La economía global terminó el año 2019 debilitada por una serie de condiciones estructurales que no fueron resueltas desde la crisis de 2008: el nivel de endeudamiento de las economías avanzadas, la creciente concentración de la riqueza y el rezago tecnológico de los Estados Unidos frente a China.

Por un lado, el nivel de endeudamiento de las economías avanzadas se puede calificar como insostenible. Tomando en cuenta a los miembros del G7, únicamente Alemania tiene un nivel de deuda “saludable”, en torno al 43% de su PIB. Por el contrario, los Estados Unidos tienen una deuda pública equivalente al 88% de su PIB; Francia, 89%; Japón, 153%; Canadá, 87%; Italia, 123%; y el Reino Unido, 75%.

Por otro lado, la excesiva concentración del ingreso presenta una serie de trabas a la recuperación económica (Stiglitz, 2019): primero, limita el dinamismo del consumo privado de las clases medias -cuyos ingresos reales están estancados o en declive-; segundo, impide que estas clases medias inviertan en educación o, alternativamente, en pequeños negocios; tercero, una elevada concentración del ingreso asociada a una escala tributaria regresiva resta recursos vitales al Gobierno para las inversiones que dinamizan el crecimiento económico.

Finalmente, la falta de competitividad de la economía estadounidense y su rezago tecnológico es ya un elemento estructural que explica la trayectoria de la economía global. Al no lograr resolver estos problemas mediante la dinamización de su propio aparato productivo, la administración de Trump ha decidido entorpecer el comercio mundial con el fin de restablecer su equilibrio comercial. Sin embargo, la dinámica de la transnacionalización de las cadenas de valor ha avanzado tanto, que una guerra comercial como la que el mundo está presenciando en este momento implica innumerables trabas para las cadenas de suministros de las propias industrias estadounidenses. Peor aún, la guerra comercial entre las dos economías más grandes del planeta ha afectado significativamente el ritmo del comercio mundial.

Gráfico 1

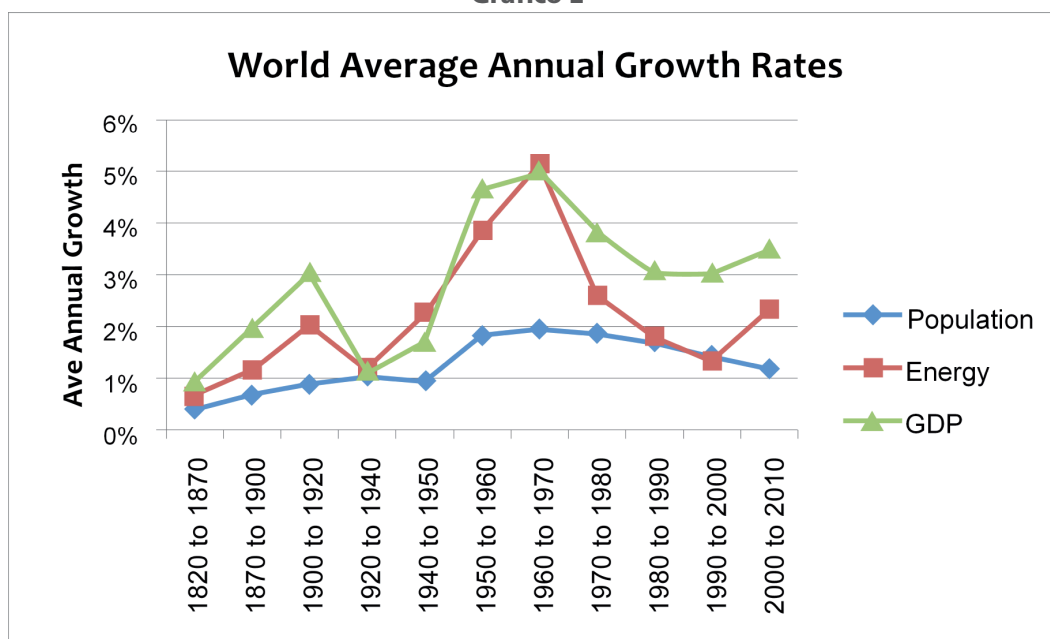


Fuente: Cepal.



América Latina se encuentra severamente afectada ya en 2019. De acuerdo a la Cepal, el período posterior a 2014 fue el de menor crecimiento para América Latina desde la década de 1950 (Cepal, 2020). Este escaso dinamismo de la región está correlacionado con la trayectoria decreciente a nivel mundial (ver gráfico). Los factores estructurales de endeudamiento, hiperconcentración de la riqueza y el declive de la antigua locomotora mundial, son algunos de los síntomas de un debilitamiento que da muestras de ser estructural.

Gráfico 2



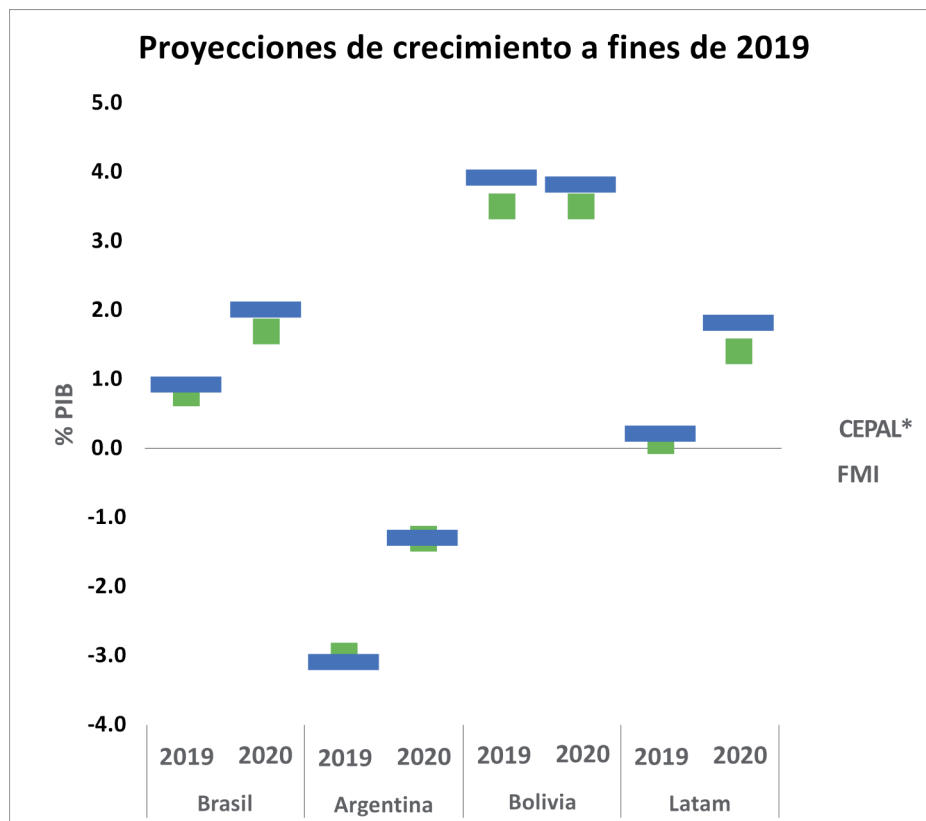
Fuente: Tverberg, G. (2012) "An Energy/GDP Forecast to 2050"

El COVID-19 precipitó una crisis que, de otro modo, seguramente hubiese vuelto a manifestarse en la esfera financiera. Al momento de escribir este documento, más de 200 países ya habían reportado la presencia del virus. La velocidad de transmisión, su nivel de letalidad y la virtual inexistencia de un tratamiento eficaz han provocado la saturación de los sistemas de salud alrededor de todo el mundo. Prácticamente todos los países (con muy escasas excepciones) han impuesto medidas de distanciamiento social, cuarentena y aislamiento de las personas infectadas. Los efectos en la economía no se hicieron esperar y al primer trimestre de 2020 la economía mundial empezó a sufrir los efectos de *shocks* simultáneos de oferta y demanda.

Antes de la crisis provocada por el COVID-19, Latinoamérica ya estaba en camino al estancamiento económico y Bolivia, pese a que tenía el reto de resolver sus desequilibrios en el área fiscal y en la cuenta corriente de la balanza de pagos, mantenía la expectativa de un crecimiento de entre 3,5% y 3,8%. Si bien el dinamismo de la economía boliviana mostraba una disminución sistemática en los últimos cinco años, a mediados de 2019 nada hacía prever una crisis. Las protestas sociales de fines de 2019 deterioraron seriamente la situación económica, pero los efectos del COVID-19 paralizó la economía.



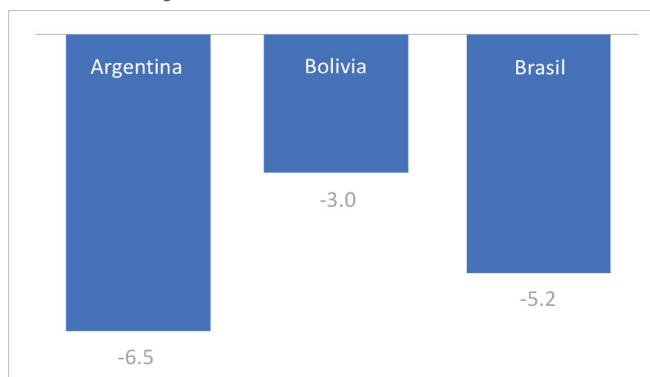
Gráfico 3



Fuente: Elaboración propia con proyecciones de FMI (oct. 2019), Cepal (diciembre 2019).

La aparición del COVID-19 provoca en América Latina el mismo efecto que a nivel global: precipita una caída de la actividad económica que ya venía debilitada en los últimos años. La Cepal ha previsto cinco mecanismos de transmisión de la crisis económica provocada por el COVID-19: 1) reducción del comercio internacional, 2) caída en los precios de los *commodities*, 3) reducción de las remesas, 4) estrechamiento de los mercados financieros y 5) disminución del turismo. La caída del PIB latinoamericano se estima en un 5,3%; Argentina tendrá una caída del 6,5%, Brasil caerá en un 5,2% y Bolivia retrocederá en un 3% (Cepal, 2020).

Gráfico 4. Proyecciones de variación del PIB (%) en 2020



Fuente: Cepal.



Los efectos de la crisis se prolongarán hasta el mediano plazo; ante una caída sincronizada de la actividad económica a nivel mundial, es prácticamente imposible un repunte en 2021, por el simple hecho de que la caída generalizada del producto se traducirá inmediatamente en una caída del ingreso per cápita y, por lo tanto, no habrá ningún jalón de demanda para esperar una recuperación.

3. OPCIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA

3.1 LA RESPUESTA A LA CRISIS

La característica central de la crisis económica causada por el COVID-19 es la presencia simultánea y generalizada de shocks de oferta y demanda. En otras palabras, los mercados -mejor dicho, la mayoría de los mercados- no están funcionando, así que el Estado debe intervenir para restablecer algún tipo de equilibrio.

En estas condiciones, la política fiscal se coloca en el centro del escenario y es reforzada por políticas monetarias expansivas.³ Los niveles de caída de la actividad económica son tan dramáticos que es muy difícil señalar un límite cuantitativo a la intervención requerida para recuperar las economías. Las medidas comunes que se han puesto en funcionamiento incluyen transferencias directas a los hogares, alivio impositivo y expansión del crédito para empresas.

Las medidas de contención económica inevitablemente se traducirán en déficit fiscal prácticamente en todo el mundo. El FMI prevé un promedio de déficit fiscal del 9,1% para las economías emergentes y del 10,7% para las economías en desarrollo. Junto con el déficit, se incrementa la deuda: las economías avanzadas tendrán un promedio de 122% de ratio de deuda/PIB, mientras que ese indicador estará en 62% para las economías emergentes (FMI, 2020).

Bolivia se verá particularmente golpeada por la abrupta caída del precio de los hidrocarburos -especialmente del petróleo, que llegó a cotizarse en valores negativos el 4 de abril de 2020-, la disminución de la demanda de gas y la caída de los precios de los minerales. Tanto el tesoro como la balanza de pagos dependen de las exportaciones de gas y de minerales; así que los impactos directos se reflejarán en la cuenta corriente (con un déficit previsto de -4,6%) y en el déficit fiscal (-7,3%), con el consiguiente deterioro de los fundamentos económicos.

Para contrarrestar los efectos económicos del confinamiento por el COVID -19, las medidas paliativas adoptadas por el Gobierno han sido las siguientes:⁴

- Bono familia de Bs 500, para las familias con estudiantes escolares.
- Canasta familiar de Bs 400, para personas beneficiarias de la renta dignidad, bono Juana Azurduy y personas con discapacidad.
- Bono universal de Bs 200, para personas que no reciben el bono familia ni la canasta familiar y que no perciben sueldos del sector público ni del privado.
- Diferimiento del pago de cuotas de crédito bancario.
- Pago del 100% de la factura del servicio de energía eléctrica y del 50% del servicio de agua potable, de acuerdo a condiciones especiales.
- Fondo de apoyo al empleo, que otorga créditos blandos para que las empresas puedan cubrir el pago de planillas.

Estas medidas tienen un diseño de alcance universal. No obstante, varios sectores han solicitado apoyos particulares al Gobierno. Estas demandas están motivadas principalmente por las demoras y problemas logísticos en la distribución de los bonos a la población.⁵ El rol

3 Una política monetaria expansiva consiste en incrementar la cantidad de dinero circulante en la economía de un país.

4 Este listado abarca las medidas dictadas hasta fines de abril de 2020.

5 <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/organizaciones-sociales-piden-beneficiarse-bonos-gobierno/20200408204343761114.html>.



central del Estado como principal responsable de las medidas de recuperación económica implica el uso intensivo de instrumentos de política fiscal, el ensanchamiento del déficit y de los requerimientos de financiamiento. En un primer momento, la política monetaria puede acompañar la expansión fiscal, pero eventualmente esta ruta llega a su fin, particularmente cuando se presentan déficits gemelos (fiscal y externo). Tanto la Cepal⁶ como el FMI⁷ han expresado la necesidad de facilitar las condiciones financieras para todos los países en desarrollo. Por un lado, se requiere ampliar el acceso al crédito; por otro, se necesita aliviar la carga financiera actualmente existente mediante esquemas de restructuración de deuda. Si estas condiciones no se cumplen, la recuperación tardará mucho en llegar.

3.2 EL DISEÑO DE MEDIDAS ESTRUCTURALES

De ahora en adelante, la situación económica en el mundo dependerá críticamente de los resultados -también mundiales- del manejo de la pandemia del COVID-19. Mientras no exista una vacuna o un tratamiento eficaz, el mundo corre el riesgo de una recuperación interrumpida por una segunda y hasta una tercera explosión de contagios.

En el futuro previsible, la economía boliviana se mantendrá con desequilibrios macroeconómicos persistentes, expresados en déficits gemelos. En el sector real, el desempeño económico se verá seriamente perjudicado por la maltrecha capacidad de arrastre de los sectores estratégicos -hidrocarburos y minería-, agravada por la menguante demanda externa y por la frágil situación del país frente a los capitales internacionales (ver recuadro).

Mientras el *shock* de oferta reabre espacios para la producción local, se evidenciarán cuellos de botella en la necesaria reconversión productiva,

atribuibles a la dependencia de insumos y materia prima importada para el sector productivo. A pesar de ello, con el juego de políticas adecuado, el sector industrial puede asumir un nuevo protagonismo.

Las medidas estructurales para salir de la crisis deberían ser asumidas por un nuevo Gobierno que emerja de las próximas elecciones. Si bien es posible presuponer que las orientaciones de política se ajustarán a la visión ideológica del ganador de los comicios, se pueden identificar, sin embargo, algunos elementos estructurales sobre los que es importante actuar.

En materia de crecimiento económico, y en atención a los requerimientos del mercado interno, se puede prever que mantener las actividades de producción de alimentos y proteger su cadena logística será fundamental. De igual manera, sabiendo que la normalidad post COVID-19 será muy distinta a la de antes de la pandemia, será importante prestar atención a las actividades económicas que se requerirán para satisfacer las nuevas modalidades de consumo. Gran parte de la demanda se concentrará en bienes y servicios que sean útiles para sostener el distanciamiento social (comercio electrónico, servicios de entrega a domicilio, entre otros) y la bioseguridad (vestimenta e implementos de protección, servicios de desinfección de ambientes, etc.).

En otro orden de cosas, el país deberá continuar honrando sus compromisos de exportación de gas. La reactivación de la explotación de litio seguirá siendo una prioridad, al igual que la introducción de biotecnología en la agroindustria para mantener la competitividad del sector que, de hecho, el Gobierno ya ha emprendido. Esta última línea de política ha sido ampliamente objetada a través de pronunciamientos públicos por diversas organizaciones de la sociedad civil, a las que se han sumado varios candidatos presidenciales.⁸

6 Cepal (2020). Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Presentación de la secretaria ejecutiva 21-04-2020, Cepal.

7 <https://blogs.imf.org/2020/04/20/a-global-crisis-like-no-other-needs-a-global-response-like-no-other/>.

8 <https://www.paginasiete.bo/economia/2020/5/10/las-semillas-transgenicos-dividen-bolivia-entre-quienes-apoyan-rechazan-255060.html>.

<https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/mas-cc-rechazan-transgenicos-camacho-contradice-vocera-adhiere-bio-tecnologia/20200510223434766959.html>.



La inversión extranjera cobrará una nueva relevancia como motor del crecimiento, mientras el sector público se dedicará a contener los efectos de la crisis y quedarse con menos recursos para invertir.

La política fiscal asumirá un rol anticíclico,⁹ acompañada de una política monetaria expansiva. Las condiciones de sostenibilidad de este enfoque dependerán críticamente de la obtención de recursos externos frescos para cubrir el déficit fiscal.

El sector financiero corre el riesgo de ser golpeado por el incremento de la mora bancaria en un contexto de caída generalizada de la actividad empresarial. Un reto importante será mantener la estabilidad del sistema bancario.

Una nueva postergación para el litio potosino

Un suceso que no puede ser pasado por alto es el hecho de que durante los conflictos poselectorales de 2019 Evo Morales derogó el Decreto Supremo 3738 que autorizaba una sociedad mixta entre la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos y la alemana aci Systems. Esta empresa era el fruto de largos años de negociaciones y gestiones orientadas a aprovechar mediante una asociación público/privada el vasto yacimiento de litio del salar de Uyuni, considerado uno de los mayores del mundo. Morales asumió esa decisión confiando en desactivar la presión regional en contra suya por parte del comité cívico de Potosí, cosa que finalmente no ocurrió. Las consecuencias son inciertas, pues la ruptura con la empresa alemana—incluso si llega a enmendarse—ya está considerada por los inversores extranjeros como una señal negativa.

No hay ninguna posibilidad de inyectar capital extranjero en Uyuni (ni en otra región ni sector económico en Bolivia) en condiciones que sean tan o igual de favorables para Bolivia, luego de este evento.

4. PANORAMA SOCIOPOLÍTICO

Bolivia enfrenta la particular situación de vivir un año electoral al mando de autoridades transitorias que deben responder a una crisis de carácter estructural. Esta notoria asincronía plantea el dilema de la responsabilidad en la toma de decisiones de largo plazo y el carácter transitorio del mandato y, por tanto, la legitimidad de las acciones del Gobierno podría verse cuestionada.

El doble rol de la actual presidenta, que además es candidata, resta fuerza a muchas de sus decisiones de gestión en la medida en que estas podrían ser interpretadas como estrategias de campaña. De igual manera, esa misma duplicidad de roles expone a las autoridades de Gobierno a un nivel de escrutinio público particularmente severo.

La paralización económica, que es una consecuencia de la cuarentena, presenta nuevos frentes de vulnerabilidad política al Gobierno de transición, especialmente entre los segmentos mayoritarios de la población insertos en el sector informal de la economía, que prácticamente carecen de colchones de protección frente al desplome de sus ingresos.

Si bien el intento del Gobierno ha sido mitigar los efectos de la cuarentena con medidas de alivio económico a las familias, no se ha logrado el balance. Al finalizar el segundo mes de cuarentena ya se

⁹ Se denomina política fiscal anticíclica a aquella combinación de instrumentos tributarios y de gasto que se orientan a contrarrestar una caída económica en situaciones de crisis.



han presentado varios episodios de protestas que han quebrantado el confinamiento en demanda de soluciones para la reposición de los medios de vida de grupos vulnerables.¹⁰ La intensidad de las protestas podría aumentar proporcionalmente al deterioro de las condiciones de vida, especialmente de la población más desvalida.

La conflictividad no solo se ha circunscrito a los sectores más golpeados en sus medios de vida. En efecto, desde el inicio de la crisis sanitaria, las limitaciones materiales del sistema de salud boliviano se han puesto de manifiesto con mucha intensidad. El personal de salud, primera línea del combate contra la enfermedad, ha sufrido bajas importantes, y ha hecho conocer su malestar en protestas esporádicas en demanda, principalmente, de equipos de protección.

Con el tiempo, la cuarentena se flexibilizará y llegará a suspenderse, pero no se descarta que pudiera presentarse una segunda oleada de contagios. Con una economía deteriorada y en presencia de más desempleo, pobreza y desigualdad las condiciones de vida en las zonas más pobres serán insostenibles. Por tanto, una segunda ronda de restricciones sería políticamente inviable y socialmente explosiva.

Otro frente de resistencia puede presentarse desde el lado de los productores. Los empresarios de unidades grandes y pequeñas han manifestado la necesidad de contar con espacios mínimos de acción para mantenerse en actividad,¹¹ y demandado en repetidas ocasiones agilidad y celeridad en el otorgamiento de autorizaciones de circulación. En suma, han hecho pública su preocupación por las consecuencias financieras de la paralización de actividades.

En el mediano plazo, las consecuencias sociales y económicas de la pandemia -incremento de la pobreza, desempleo y marginalidad- activarán conflictos en distintos lugares y con diversos sectores. Por su parte, las organizaciones sociales tradicionales demandarán prontas y oportunas

medidas de reactivación económica de los sectores a los que representan e intentarán ejercitar su capacidad de movilización a nivel nacional.

La situación en el Chapare cochabambino es particularmente compleja, pues es el territorio de las organizaciones de coccaleros, base política del MAS, el partido del depuesto expresidente Morales. El nivel de legitimidad de las instituciones estatales del nivel central es prácticamente nulo en esta región. Las fronteras entre la disputa política y la protesta por el deterioro de las condiciones de vida son borrosas o inexistentes. Es previsible que se presenten conflictos intermitentes en esta región, cuya intensidad dependerá de la capacidad de negociación de las partes.

Hay que recordar que las transformaciones económicas y demográficas que ha vivido Bolivia en los últimos lustros han generado una nueva composición sociopolítica. Las generaciones más jóvenes tienen acceso a mayores niveles educativos, parámetros de consumo distintos y expectativas de movilidad socioeconómica individual diferentes a las de las generaciones pasadas. El escenario de deterioro económico provocado por el COVID-19 puede rápidamente favorecer movilizaciones que interpelen a jóvenes que ven afectado su modo de vida o -al quedarse sin oportunidades ni alternativas laborales- truncadas sus expectativas de ascenso social.

Un indicador clave de las transformaciones sociales está dado por la velocidad del incremento anual de la matrícula universitaria, que se ha situado en el 6% entre 2011 y 2017, mientras que el crecimiento poblacional estuvo alrededor del 1,4%. Como resultado, actualmente tenemos medio millón de estudiantes universitarios en las ciudades del eje, la mayoría de ellos en universidades públicas, que son tradicionalmente espacios de muy alta politización. Si las medidas de salida de la crisis no son calibradas adecuadamente en función de su factibilidad política, muchas de ellas podrían ser revertidas a causa de conflictos sociales de magnitud.

¹⁰ <https://elpais.com/internacional/2020-04-03/la-cuarentena-desata-protestas-en-barrios-populares-de-bolivia.html>.

¹¹ <https://www.europapress.es/internacional/noticia-enfrentamientos-policias-manifestantes-protesta-contra-cuarentena-bolivia-20200512135721.html>.



5. SINTESIS

- La situación económica mundial presentaba serios riesgos desde antes de 2019, debido a la persistencia de desequilibrios estructurales en las economías avanzadas: excesivo endeudamiento, hiperconcentración del ingreso y posicionamiento de la China como un competidor robusto en tecnología de punta. En el último año, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, junto con las tensiones geopolíticas en Irán, redujeron el ritmo del comercio y contribuyeron a una tendencia decreciente del desempeño económico global.
- La súbita aparición de la pandemia del COVID-19 precipitó las tendencias negativas, pues las medidas de contención necesariamente se traducen en paralización social y económica, con lo que las cadenas de abastecimiento se interrumpen al mismo tiempo que la demanda de consumo se reduce al mínimo.
- América Latina y Bolivia están sufriendo las consecuencias de la crisis económica que se manifiesta en la reducción del comercio internacional, desplome de los mercados de materias primas, estrangulamiento financiero, caída de las remesas internacionales y casi desaparición del turismo.
- Los shocks simultáneos de oferta y demanda limitan el funcionamiento de los mercados. Por tanto, es la acción estatal la que define la gestión de los equilibrios.
- Como el Estado es el actor central, la política fiscal asume un rol protagónico en la aplicación de medidas de contención. La política monetaria tiende a acomodarse a los requerimientos del sector fiscal.
- Se prevé un incremento del déficit fiscal, acompañado de un incremento del déficit externo. Esta situación obligaría a contraer préstamos de última instancia y a ejecutar medidas de alivio de la deuda externa.
- Bolivia tiene la particularidad de haberse visto afectada por la crisis y la pandemia en medio de un período electoral, con el añadido de que la actual presidenta transitoria es, además, candidata. El país aún no ha superado la polarización política exacerbada por los conflictos poselectorales.
- Se presenta una asincronía evidente entre el período del actual mandato presidencial y la adopción de medidas de política económica que tendrán repercusión en el mediano plazo.
- Las medidas de contención de la pandemia del COVID-19, en particular la cuarentena, han afectado significativamente los medios de vida de la población más vulnerable, que fundamentalmente depende del funcionamiento de la economía informal. Varios grupos provenientes de estos segmentos han protagonizado conflictos y han quebrantado la cuarentena en demanda de condiciones para recuperar sus fuentes de ingresos.
- En el mediano plazo se prevé que las consecuencias sociales y económicas de la crisis provocada por el COVID-19 generen conflictos, no solo entre los sectores que tradicionalmente tienen capacidad de movilización, sino también en los segmentos más jóvenes de la población que son portadores de nuevas expectativas.
- Es previsible una segunda ola de contagios, que podría obligar a una segunda cuarentena. Ni los grupos sociales sumergidos en la informalidad ni las empresas establecidas están en condiciones de asumir un segundo parón económico. En estas condiciones, una nueva cuarentena es políticamente inviable.
- En el mediano plazo, la conflictividad social -si no es bien gestionada- podría revertir decisiones de gestión pública.



6. REFERENCIAS

Cepal (2016), Panorama Social de América Latina 2015. Santiago: Cepal.

— (2020), Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Presentación de la secretaria ejecutiva, 21-04-2020, Cepal.
Estevadeordal, A. (2018), "América Latina en la nueva arquitectura comercial Asia-Pacífico".

IMF (2020), Fiscal Monitor April 2020. Washington, IMF.

OECD (2015), The Economic Consequences of Climate Change. Paris: OECD.

Piketty, T. (2014), Capital in the 21st Century. Cambridge Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press.

Reinhart, C. and K. Rogoff (2009), "The aftermath of financial crisis". American Economic Review, American Economic Association, 99(2): 466-472.

Stiglitz, J. (2019), Inequality is holding back the recovery. <https://opinionator.blogs.nytimes.com/>.



Autor:

Pablo Rossell Arce

Pablo Rossell es economista con maestría en políticas públicas y gestión del desarrollo. Tiene una amplia trayectoria trabajando en el sector público y como consultor de varios organismos multilaterales y ha publicado varios análisis y estudios sobre temas de desarrollo.



Queda terminantemente prohibido el uso comercial de todos los materiales editados y publicados por la Friedrich - Ebert - Stiftung (FES) sin previa autorización escrita de la misma.

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Pie de imprenta

Friedrich-Ebert-Stiftung Bolivia

Av. Hernando Siles C/14 Obrajes N° 5998

La Paz - Bolivia

ISBN: 978-9917-0-0374-8

DL: 4-4-879-20

Contacto

Tel: +591 2-2750005

Fax: +591-2-2750090

www.fes-bolivia.org

info@fes-bolivia.org

Facebook: Fundación

Friedrich Ebert Bolivia

Twitter: @BoliviaFes